Plaza Pública para el domingo 15 de septiembre del 2002
Desafuero y huelga
por miguel ángel granados chapa

Amén de conseguir órdenes de aprehensión contra dirigentes sindicales no protegidos por fuero parlamentario, la Procuraduría General de la República solicitó el martes 10 remover la inmunidad del diputado local tamaulipeco Jesús Olvera Méndez, y de los legisladores federales Carlos Romero Deschamps y Luis Ricardo Aldana Prieto. Aquél es secretario general de la sección 1, de Ciudad Madero y, según sus opositores, es más fácil encontrarlo en las cantinas que en su despacho de dirigente.

Romero Deschamps es secretario general del sindicato desde hace nueve años, y desde hace once pertenece al Congreso, como diputado, senador y nuevamente diputado. Aldana es tesorero del comité nacional, después de haber sido dirigente de la sección 40, y es senador de representación proporcional.

La PGR solicitó el desafuero para poder investigar la presunta responsabilidad penal de los legisladores en la recepción indebida de 1,580 millones de pesos por cuya entrega se libraron órdenes de aprehensión contra el ex director general de Pemex Rogelio Montemayor y varios de sus colaboradores.

La petición había sido anunciada la víspera por el secretario de Gobernación Santiago Creel al presidente y la secretaria general del PRI, Roberto Madrazo y Elba Ester Gordillo, tan acuaches con el gobierno. Pero la deferencia no evitó que los diputados priístas salieran en bloque de la Cámara el miércoles 11, dejando a Creel plantado a media comparecencia, pues a la estampida tricolor se agregó la dejadez panista o la taimada expresión de sus desavenencias interiores y la sesión tuvo que ser suspendida.

La actitud priísta no fue meramente circunstancial. Es parte de una estrategia para presionar políticamente y estorbar legalmente la tramitación del pedido de la Procuraduría. Sus diputados han puesto en duda la posibilidad de constituir la sección instructora, un breve comité procesal de cuatro legisladores que debe determinar si ha lugar a la declaratoria de procedencia, nombre formal del desafuero, que debe ser sometida al pleno de la Cámara en un plazo no mayor de sesenta días. Se basan, para difundir dudas sobre la pertinencia del trámite, en el desfase generado por la promulgación en 1999 de una nueva Ley orgánica del Congreso, que modificó el modo de abordar las responsabilidades de los servidores públicos, en cuya ley se determina el procedimiento parlamentario respectivo.

El desajuste nominal en efecto existe, pero la norma que rige al poder legislativo es clara al respecto. El numeral cinco del artículo cuarenta de la ley congresional dispone la integración de la Comisión Jurisdiccional, un mecanismo necesario en un poder cuya

función esencial es hacer leyes pero que ha de ejercer atribuciones que implican impartir justicia o, más exactamente, “decir el derecho”, que eso quiere decir jurisdicción. “La Comisión jurisdiccional --dice ese texto-- se integrará por un mínimo de 12 diputados y un máximo de 16, a efecto de que entre ellos se designen a los que habrán de conformar, cuando así se requiera, la sección instructora encargada de las funciones a que se refiere la ley reglamentaria del título cuarto de la Constitución en materia de responsabilidades de los servidores públicos”.

A partir de un acuerdo entre PAN y PRD, la Junta de coordinación política, entre cuyas funciones se halla la de proponer al pleno las comisiones, decidió organizar la sección instructora. Determinó también que sus cuatro miembros correspondan dos a Acción Nacional, uno al PRI y otro al PRD. Así lo convinieron el panista Felipe Calderón y el perredista Martí Batres, para impedir que la bancada priísta impida integrar la sección. No hay, como podría haber, representantes de los cuatro partidos con mayor representación, porque el que con leche se quema hasta al jocoque le sopla: el cuarto lugar correspondería al Partido Verde, que en la legislatura pasada se valió de su voto estratégico en la análoga subcomisión de examen previo, que se ocupa de los juicios políticos, y aliado al PRI evitó el que se buscaba iniciar a Roberto Madrazo.

En la historia mexicana reciente sólo dos legisladores han sido desaforados. Carlos A. Madrazo y dos diputados más cayeron en la cárcel en 1944, pero fue posible enjuiciarlos porque pidieron licencia. En cambio, se negó esa posibilidad al general Félix Ireta, ex gobernador de Michoacán y senador a quien se privó del fuero en octubre de 1947. “Al principio de la acusación --explicó-- solicité dos meses de licencia para que se esclarecieran los hechos de que he sido inculcado, pero la Cámara no dio cuenta de ello, no obstante que yo proponía despojarme del fuero y entregarme inmediatamente a las autoridades judiciales”. Con entereza declaró que se presentaría ante los diputados: “responderé primeramente ante mis compañeros los legisladores de los cargos que me formulen. Una vez cumplida esa obligación, partiré a Morelia y yo mismo me entregaré al juez de distrito ante el que ha sido turna la acusación por la Procuraduría de la República, para responder ya en el terreno legal y hacer mi defensa”.

Así lo hizo. Aunque estuvo preso casi un año, el 14 de septiembre de 1948 salió libre, exonerado por la Suprema Corte de Justicia, en una sentencia firmada por el ministro Luis Chico Goerne, ex rector de la Universidad Nacional, que halló infundado el cargo de haber recibido 38 mil pesos por 679 cerdos enfermos de fiebre aftosa, que nunca habían existido. La absolución permitió a Ireta volver al Senado. “Yo considero --dijo allí al regresar-- que siempre que esté en tela de juicio la conducta de un funcionario público debe procederse sin contemplaciones, porque sólo así habrá la posibilidad de castigar al culpable o de hacerle justicia si injustamente fue acusado”.

Jorge Díaz Serrano fue el segundo senador desaforado. Rival del secretario de Programación Miguel de la Madrid, pues desde la dirección de Pemex se sintió aspirante a la presidencia de la República, Díaz Serrano fue despedido de la empresa petrolera por su amigo José López Portillo al apresurarse a reducir los precios del crudo de exportación en la crisis de 1981. Pero lo rehabilitó meses después y lo convirtió en senador por Sonora. A esa posición correspondía el fuero que lo amparaba, aunque los delitos por los que se le procesó dataran de una época anterior.

Acusado de fraude por más de cinco mil millones de pesos, Díaz Serrano acudió a la sección instructora formada por tres priístas (Mariano Piña Olaya, José Luis Lamadrid y César Vieyra Salgado) y sólo un diputado de la oposición, el panista don Juan José Hinojosa. Aunque se sabía que la acusación resultaba de un ajuste de cuentas entre políticos del mismo partido, tenía también sustento material y jurídico. Por eso Hinojosa pudo avalar: ““El procedimiento fue formalmente impecable. La sección instructora, me consta, actuó con gran neutralidad y así, sin erigirse en juez, encontró indicios claros, suficientes, que permiten delinear el perfil del delito y, por lo tanto, la procedencia del desafuero”.

La solicitud para que un desenlace semejante se produzca respecto de Aldana y Romero Deschamps se presentó a la mitad de un proceso de negociación salarial. Para ganar tiempo respecto de su suerte procesal, el líder petrolero se avino a que la revisión correspondiente a este año no concluyera el último día de julio, sino que el plazo se ampliara dos meses más, que se cumplen el último día de septiembre. Formalmente, ese día puede llegarse a la huelga, pues todos los sindicatos en todas las ocasiones, al plantear la revisión contractual o solamente salarial, emplazan a huelga. En Pemex no la ha habido nunca, pero al combinarse ahora el ingrediente político y judicial con el tema puramente laboral, se ha despertado el temor de que la empresa petrolera nacional pudiera paralizarse o, al contrario, que se admitiera la impunidad de los dirigentes acusados a cambio de una tersa conclusión del episodio salarial.

Sería en extremo difícil que haya tal huelga. Si bien persisten criterios diferentes para medir la productividad, en cuyo incremento basa el sindicato su alegato para el alza de los salarios, diferendos como ese se han resuelto siempre, incluido el del año pasado, primero de la nueva administración, designada por un gobierno con el que el sindicato no mantiene lazos estructurales o de complicidad, tan estrechos que precisamente de ellos deriva la actual situación de sus dirigentes. Si por razones laborales es remota la posibilidad de una huelga, en mayor medida lo es por razones políticas. Es decir, la suerte de Romero Deschamps no llevaría a sus presuntos representados a suspender las labores. Aun si se echa a andar el procedimiento en la Cámara, el 30 de septiembre apenas estaría comenzando a sesionar la sección instructora, de manera que no se podría

alegar un peligro inminente de prisión para el diputado y para sus amigos.

Y aun si lo hubiera, es probable que se reprodujeran las circunstancias de enero de 1989. Entonces fue detenido Joaquín Hernández Galicia, apodado *La Quina*, rector indiscutido del sindicato, del que mucho tiempo atrás había sido secretario general pero cuyo liderazgo real conservaba. Algunos de sus fieles intentaron paros parciales en algunas instalaciones. No tuvieron éxito. Por una mezcla de indiferencia, temor y responsabilidad, los trabajadores petroleros no se sintieron aludidos por la suerte de su dirigente y continuaron sus labores. El oportunismo convenenciero terminó de resolver el falso problema: los amigos de La Quina dejaron de serlo, y antes de un mes una nueva dirección sindical asumía la que cayó en desgracia junto con Hernández Galicia. Figuraba en el nuevo comité, como secretario de organización, Romero Deschamps, uno de los favoritos del líder depuesto. Si es desafortunado, si llega a la cárcel, jure usted que habrá un Romero Deschamps que obre como éste en relación con *La Quina*.

También permite suponer que no habría huelga, como respuesta solidaria de los trabajadores con sus representantes en dificultades, el hecho de que esa representación es forzada cuando no es ficticia. En el dos mil se hizo notoria la rebelión de petroleros, sindicalizados o de confianza, contra la obligatoriedad del proselitismo o el voto priísta. Y en las elecciones internas del año antepasado fue preciso que el autoritarismo interno se acentuara, a fin de preservar en el mando a los líderes adictos a Romero Deschamps, algunos de los cuales, los más conspicuos por su corrupción o su altanería, cuentan en la lista de los que la PGR busca aprehender.

Se efectuaron en octubre del 2000, simultáneamente, comicios en las 36 secciones sindicales. Se anticipó dos meses la fecha, para impedir la organización de los grupos opositores. Éstos tienen que combatir en la penuria y ante el derroche de recursos de los candidatos oficiales, cuya propaganda suele incluir fiestas en burdeles. Pero aun si la contienda fuera equitativa, la falta de libertad a la hora de votar determina de antemano el resultado. Y es que las cédulas de votación deben ser llenadas con el nombre, el número de ficha, la adscripción y la firma del votante, de modo que no hay secreto posible y los trabajadores quedan a merced de los caciques.

En 15 secciones se impidió el registro de las planillas opositoras. En la jornada electoral, según el Informe final de un Comité de observadores independientes, menudearon las muestras de compra y coacción del voto. Los comités electorales no son neutrales, y aun la presencia de autoridades laborales (que es contraria a la libertad sindical, según el comité respectivo de la Organización Internacional del Trabajo) juega en favor de la represión, por la familiaridad entre líderes y funcionarios.

En los dos meses siguientes a la elección se interpusieron recursos en 19 de las 36 secciones. Sólo seis fueron admitidos para iniciar recursos de revisión administrativa

Desafuero y huelga

Aun si se instala pronto la sección instructora en la Cámara de Diputados, a cuyo pleno deberá ese comité proponer la declaratoria de procedencia respecto de los legisladores petroleros acusados, no hay para ellos riesgo jurídico cercano, por lo que no habría una huelga en su defensa, ni los trabajadores la harían por esa causa.

AMÉN DE CONSEGUIR ÓRDENES DE APREHENSión contra dirigentes sindicales no protegidos por fuero parlamentario, la Procuraduría General de la República solicitó el martes 10 remover la inmunidad del diputado local tamaulipeco Jesús Olvera Méndez, y de los legisladores federales Carlos Romero Deschamps y Luis Ricardo Aldana Prieto. Aquél es secretario general de la sección 1, de Ciudad Madero y, según sus opositores, es más fácil encontrarlo en las cantinas que en su despacho de dirigente.

Romero Deschamps es secretario general del sindicato desde hace nueve años, y desde hace once pertenece al Congreso, como diputado, senador y nuevamente diputado. Aldana es tesorero del comité nacional, después de haber sido dirigente de la sección 40, y es senador de representación proporcional.

La PGR solicitó el desafuero para poder investigar la presunta responsabilidad penal de los legisladores en la recepción indebida de mil 580 millones de pesos por cuya entrega se libraron órdenes de aprehensión contra el ex director general de Pemex Rogelio Montemayor y varios de sus colaboradores.

La petición había sido anunciada la víspera por el secretario de Gobernación Santiago Creel al presidente y la secretaria general del PRI, Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo, tan acuachos con el gobierno. Pero la deferencia no evitó que los diputados priistas salieran en bloque de la Cámara el miércoles 11, dejando a Creel plantado a media comparecencia, pues a la estampida tricolor se agregó la dejadez panista o la taimada expresión de sus desavenencias interiores y la sesión tuvo que ser suspendida.

La actitud priista no fue meramente circunstancial. Es parte de una estrategia para presionar políticamente y estorbar legalmente la tramitación del pedido de la Procuraduría. Sus diputados han puesto en duda la posibilidad de constituir la sección instructora, un breve comité procesal de cuatro legisladores que debe determinar si ha lugar a la declaratoria de procedencia, nombre formal del desafuero, que debe ser sometida al pleno de la Cámara en un plazo no mayor de sesenta días. Se basan, para difundir dudas sobre la pertinencia del trámite, en el desfasamiento generado por la promulgación en 1999 de una nueva Ley orgánica del Congreso, que modificó el modo de abordar las responsabilidades de los servidores públicos, en cuya ley se determina el procedimiento parlamentario respectivo.

El desajuste nominal en efecto existe, pero la norma que rige al Poder Legislativo es clara al respecto. El numeral cinco del artículo cuarenta de la ley congresional dispone la integración de la Comisión Jurisdiccional, un mecanismo necesario en un poder cuya función esencial es hacer leyes pero que ha de ejercer atribuciones que implican impartir justicia o, más exactamente, "decir el derecho", que eso quiere decir jurisdicción. "La Comisión jurisdiccional -dice ese texto- se integrará por un mínimo de 12 diputados y un máximo de 16, a efecto de que entre ellos se designen a los que habrán de conformar, cuando así se requiera, la sección instructora encargada de las funciones a que se refiere la ley reglamentaria del título cuarto de la Constitución en materia de responsabilidades de los servidores públicos".

A partir de un acuerdo entre PAN y PRD, la Junta de coordinación política, entre cuyas funciones se halla la de proponer al pleno las comisiones, decidió organizar la sección instructora. Determinó también que de sus cuatro miembros correspondan dos a Acción Nacional, uno al PRI y otro al PRD. Así lo convinieron el panista Felipe Calderón y el perredista Martí Batres, para impedir que la bancada priista impida integrar la sección. No hay, como podría haber, representantes de los cuatro partidos con mayor representación, porque el que con leche se quema hasta al jocoque le sopla: el cuarto lugar correspondería al Partido Verde, que en la legislatura pasada se subcomió de su voto estratégico en la análoga subcomisión de examen previo, que se ocupa de los juicios políticos, y aliado al PRI evitó el que se buscaba iniciar a Roberto Madrazo.

En la historia mexicana reciente sólo dos legisladores han sido desafueros. Carlos A. Madrazo y dos diputados más cayeron en la cárcel en 1944, pero fue posible injuiciarlos porque pidieron licencia. En cambio, se negó esa posibilidad al general Félix Ireta, ex gobernador de Michoacán y senador a quien se privó del fuero en octubre de 1947. "Al principio de la acusación -explicó- solicité dos meses de licencia para que se esclarecieran los hechos de que he sido inculcado, pero la Cámara no dio cuenta de ello, no obstante que yo proponía despojarme del fuero y entregarme inmediatamente a las autoridades judiciales". Con entereza declaró que se presentaría ante los diputados: "responderé primeramente ante mis compañeros los legisladores de los cargos que me partúlen. Una vez cumplida esa obligación, partiré a Morelia y yo mismo me entregaré al juez de distrito ante el que ha sido turnada la acusación por la Procuraduría de la República, para responder ya en el

terreno legal y hacer mi defensa".

Así lo hizo. Aunque estuvo preso casi un año, el 14 de septiembre de 1948 salió libre, exonerado por la Suprema Corte de Justicia, en una sentencia firmada por el ministro Luis Chico Goerne, ex rector de la Universidad Nacional, que halló infundado el cargo de haber recibido 38 mil pesos por 679 cerdos enfermos de fiebre aftosa, que nunca habían existido. La absolución permitió a Ireta volver al Senado. "Yo considero -dijo allí al regresar- que siempre que esté en tela de juicio la conducta de un funcionario público debe procederse sin contemplaciones, porque sólo así habrá la posibilidad de castigar al culpable o de hacerle justicia si

Don Juan José Hinojosa fue el único diputado de oposición, panista, en la sección instructora que autorizó el desafuero de un poderoso ex director general de Pemex, en un episodio que si bien tenía las características de un ajuste de cuentas entre priistas, era un caso claro de corrupción.

injustamente fue acusado".

Jorge Díaz Serrano fue el segundo senador desafuero. Rival del secretario de Programación Miguel de la Madrid, pues desde la dirección de Pemex se sintió aspirante a la Presidencia de la República, Díaz Serrano fue despedido de la empresa petrolera por su amigo José López Portillo al apresurarse a reducir los precios del crudo de exportación en la crisis de 1981. Pero lo rehabilitó meses después y lo convirtió en senador por Sonora. A esa posición correspondía el fuero que lo amparaba, aunque los delitos por los que se le procesó dataran de una época anterior.

Acusado de fraude por más de cinco mil millones de pesos, Díaz Serrano acudió a la sección instructora formada por tres priistas (Mariano Piña Olaya, José Luis Lamadrid y César Vieyra Salgado) y sólo un diputado

Fernando Pacheco, líder de la sección 24 del sindicato petrolero, con sede en Salamanca, es uno de los dirigentes que la PGR busca aprehender, lo que de lograrse significaría un viraje en su suerte, que hasta ahora le ha dado riqueza y hasta la fortuna de que adversarios suyos mueran en un accidente carretero.

de la oposición, el panista don Juan José Hinojosa. Aunque se sabía que la acusación resultaba de un ajuste de cuentas entre políticos del mismo partido, tenía también sustento material y jurídico. Por eso Hinojosa pudo avalar: "El procedimiento fue formalmente impecable. La sección instructora, me consta, actuó con gran neutralidad y así, sin erigirse en juez, encontró indicios claros, suficientes, que permiten delinear el perfil del delito y, por lo tanto, la procedencia del desafuero".

La actitud para que un desenlace semejante se produzca respecto de Aldana y Romero Deschamps se presentó a la mitad de un proceso de negociación salarial. Para ganar tiempo respecto de su suerte procesal, el líder petrolero se avino a que la revisión correspondiente a este año no concluyera el último día de julio, sino que el plazo se ampliara dos meses más, que se cumplen el último día de septiembre. Formalmente, ese

día puede llegarse a la huelga, pues todos los sindicatos en todas las ocasiones, al plantear la revisión contractual o solamente salarial, emplazan a huelga. En Pemex no la ha habido nunca, pero al combinarse ahora el ingrediente político y judicial con el tema puramente laboral, se ha despertado el temor de que la empresa petrolera nacional pudiera paralizarse o, al contrario, que se admitiera la impunidad de los dirigentes acusados a cambio de una tersa conclusión del episodio salarial.

Sería en extremo difícil que haya tal huelga. Si bien persisten criterios diferentes para medir la productividad, en cuyo incremento basa el sindicato su alegato para el alza de los salarios, diferendos como ese se han resuelto siempre, incluido el del año pasado, primero de la nueva administración, designada por un gobierno con el que el sindicato no mantiene lazos estructurales o de complicidad, tan estrechos que precisamente de ellos deriva la actual situación de sus dirigentes. Si por razones laborales es remota la posibilidad de una huelga, en mayor medida lo es por razones políticas. Es decir, la suerte de Romero Deschamps no llevaría a sus presuntos representados a suspender las labores. Aun si se echa a andar el procedimiento en la Cámara, el 30 de septiembre apenas estaría comenzando a sesionar la sección instructora, de manera que no se podría alegar un peligro inminente de prisión para el diputado y para sus amigos.

Y aun si lo hubiera, es probable que se reprodujeran las circunstancias de enero de 1989. Entonces fue detenido Joaquín Hernández Galicia, apodado *La Quina*, rector indiscutido del sindicato, del que mucho tiempo atrás había sido secretario general pero cuyo liderazgo real conservaba. Algunos de sus fieles intentaron paros parciales en algunas instalaciones. No tuvieron éxito. Por una mezcla de indiferencia, temor y responsabilidad, los trabajadores petroleros no se sintieron aludidos por la suerte de su dirigente y continuaron sus labores. El oportunismo convenenciero terminó de resolver el falso problema: los amigos de *La Quina* dejaron de serlo, y antes de un mes una nueva dirección sindical asumía la que cayó en desgracia junto con Hernández Galicia. Figuraba en el nuevo comité como secretario de organización, Romero Deschamps, uno de los favoritos del líder depuesto. Si es desafuero, si llega a la cárcel, jure usted que habrá un Romero Deschamps que obre como éste en relación con *La Quina*. Por eso, porque conoce a su gente, Hernández Galicia asegura a *Reforma* que Pemex no se paralizará.

También permite suponer que no habría huelga, como respuesta solidaria de los trabajadores con sus representantes en dificultades, el hecho de que esa representación es forzada cuando no es ficticia. En el dos mil se hizo notoria la rebelión de petroleros sindicalizados o de confianza, contra la obligatoriedad del proselitismo o el voto priista. Y en las elecciones internas del año antepasado fue preciso que el autoritarismo interno se acentuara, a fin de preservar en el mando a los líderes adictos a Romero Deschamps, algunos de los cuales, los más conspicuos por su corrupción o su altanería, cuentan en la lista de los que la PGR busca aprehender.

Se efectuaron en octubre del 2000, simultáneamente, comicios en las 36 secciones sindicales. Se anticipó dos meses la fecha, para impedir la organización de los grupos opositores. Éstos tienen que combatir en la penuria y ante el derroche de recursos de los candidatos oficiales, cuya propaganda suele incluir fiestas en burdeles. Pero aun si la contienda fuera equitativa, la falta de libertad a la hora de votar determina de antemano el resultado. Y es que las cédulas de votación deben ser llenadas con el nombre, el número de ficha, la adscripción y la firma del votante, de modo que no hay secreto posible y los trabajadores quedan a merced de los caciques.

En 15 secciones se impidió el registro de las planillas opositoras. En la jornada electoral, según el Informe final de un Comité de observadores independientes, menudearon las muestras de compra y coacción del voto. Los comités electorales no son neutrales, y aun la presencia de autoridades laborales (que es contraria a la libertad sindical, según el comité respectivo de la Organización Internacional del Trabajo) juega en favor de la represión, por la familiaridad entre líderes y funcionarios.

En los dos meses siguientes a la elección se interpusieron recursos en 19 de las 36 secciones. Sólo seis fueron admitidos para iniciar recursos de revisión administrativa respecto de la "toma de nota", el indebido acto de la autoridad laboral que da por buena la integración de un comité, que debería existir sólo por la libertad de los trabajadores. La razón por la que esos recursos no prosperaron consta en los estatutos del sindicato: sólo el comité ejecutivo general puede impugnar la "toma de nota", no los trabajadores afectados por el proceso electoral.

El descontento evidenciado en aquellos episodios, pero presente también en la vida cotidiana, es reprimido con gran rigor por los comités sindicales, apoyados por la empresa. Si este contubernio cesa, como es ocasión de que ocurra, se acentuará la debilidad de los representantes a fuerzas. Es poco creíble, por ejemplo, que los trabajadores de la refinería de Salamanca vayan a la huelga en defensa o por solidaridad con su cacique, el dirigente de la sección 24, Fernando Pacheco, requerido también por la justicia federal ahora. Su escandaloso enriquecimiento personal choca a los petroleros, los cuales, en esa sección y en el resto del sindicato, son personas honorables que quieren trabajar honestamente y del mismo modo ser remuneradas. Pacheco ha tenido tan buena fortuna que no sólo es muy rico sino que dos de sus adversarios murieron en un accidente de carretera cuando volvían de acusarlo. Pero quizá su sino ha cambiado.